

IMPACTOS SOCIALES DEL PROCESO DE TRANSICIÓN ECONÓMICA  
DE EUROPA DEL ESTE

*SOCIAL IMPACTS OF THE ECONOMIC TRANSITION PROCESS IN  
EASTERN EUROPE*

*María Jesús Vara Miranda*  
Universidad Autónoma de Madrid  
maria.vara@uam.es

BIBLID [1576-0162 (2003) 8, 2003, 175-204]

RESUMEN:

El artículo pretende conocer cómo se han repartido entre las diferentes capas sociales los resultados negativos y positivos del cambio sistémico de Europa del Este. Quiénes son los ganadores y perdedores del proceso y qué oportunidades tienen los más desfavorecidos para afrontar sus problemas. Para ello, se analiza, en primer lugar, la contribución del mercado de trabajo al aumento de las desigualdades y la capacidad del sector público para corregir esas desviaciones. A continuación se estudia la distribución de la renta y las características de la población afectada por la pobreza.

*Palabras clave:* PECO, costes sociales, mercado de trabajo, distribución de la renta, pobreza.

ABSTRACT:

The paper seeks to know how the negative and positive results of systemic change in Eastern Europe have been shared among different social levels. Who are the winners and the losers of this process and what opportunities have the most marginal groups to face up their problems. Thus, it analyses, first of all, the labor market contribution to increase inequality and the public sector capacity to correct these deviations. Later on is examined the income distribution and the features of the population concerned by poverty.

*Key words:* CEE countries, social costs, labor market, income distribution, poverty.

*Clasificación JEL:* P21, D31.

## INTRODUCCIÓN

Los Países de Europa Central y Oriental (PECO) han obtenido resultados económicos favorables en la segunda mitad de los años noventa, que les han permitido recuperar parte de las pérdidas productivas sufridas pocos años antes, cuando iniciaron su proceso de transición dirigido a cambiar de sistema económico. El grupo más avanzado en esas reformas, el denominado «Grupo de Visegrado» que incluye a los países centroeuropeos más próximos a Europa occidental, ha conseguido con esa dinámica de crecimiento superar los niveles productivos que tenía en el punto de partida fechado en 1989; no obstante, tanto Bulgaria y Rumania, como los Países Bálticos aún están por debajo de ese nivel de referencia. Todos ellos se han acercado a los objetivos de estabilización macroeconómica logrando frenar las tensiones inflacionistas en cifras manejables y manteniendo proporciones moderadas de déficit público. Además, esos diez países son candidatos a la adhesión a la Unión Europea y las autoridades comunitarias han considerado que, excepto los dos balcánicos, cumplen los *criterios de adhesión de Copenhague*, lo cual en su vertiente económica significa que su funcionamiento responde a las características de la economía de mercado y que están en condiciones de afrontar la competencia con los mercados occidentales.

No obstante, todavía su nivel de desarrollo está bastante alejado del de sus vecinos occidentales, tal y como reflejan distintos indicadores, entre otros el PIB per cápita en paridad de poder de compra que equivalía en el año 2000 al 42% de la media de la UE-15. En el ranking mundial de ese mismo año que elabora el PNUD con los datos del IDH, Eslovenia ocupaba la mejor posición con el puesto 29 y la peor correspondía a Rumania con el puesto 63, lo cual los coloca detrás de las economías desarrolladas, compartiendo la franja de países con desarrollo medio en la que están algunos de América Latina, como Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica y México.

Evidentemente esos buenos resultados económicos son un requisito imprescindible para que pueda mejorar el nivel de vida de la población, aun-

que no existen garantías a priori de que su difusión entre las diferentes capas sociales se produzca de manera automática. De modo que, en las páginas que siguen pretendemos analizar cómo se han reflejado los cambios económicos en la situación social de la población, intentando constatar si esa recuperación del crecimiento ha ido acompañada de una difusión ventajosa del aumento de rentas entre la mayor parte de la sociedad, o bien, por el contrario, sólo para algunos grupos que ocupan las posiciones más altas de la pirámide social. En definitiva, se trata de poner de manifiesto quienes son los ganadores y perdedores de este proceso y qué oportunidades se están poniendo a disposición de estos últimos para mejorar sus condiciones de vida.

Aunque en el análisis abordamos con carácter general las tendencias comunes a los diez países considerados<sup>1</sup>, somos conscientes de la diversidad de sus rasgos específicos y así los resaltamos en la medida en que los datos disponibles lo permiten. Dada la amplitud del tema, hemos creído preciso acotarlo para fijar algunas coordenadas del mismo. Los aspectos que principalmente se analizan son los referidos a la evolución del empleo y de las remuneraciones laborales como factores que influyen en la generación de desigualdades en la distribución de la renta, introduciendo también diversas consideraciones sobre la actividad del sector público como elemento capaz de corregir en alguna medida esas desviaciones.

Seguidamente, se utilizan índices Gini de distribución de rentas laborales y del conjunto de rentas de los hogares -disponibles sólo para una muestra de cinco países de la región-, para tratar de evaluar en qué medida los comportamientos del empleo y de los salarios han podido ser los principales determinantes del grado de desigualdad reflejado por cada país; en un apartado posterior se examinan la magnitud y características de las bolsas de pobreza surgidas en todos los países de la región a lo largo del periodo de transición. Ese contraste entre empleo-salarios y distribución de la renta es el que nos permite alcanzar las conclusiones finales del trabajo

## 1. ACTIVIDAD LABORAL

### 1.1. EMPLEO

En la época socialista, aproximadamente, las tres cuartas partes de la población estaban ocupadas, que era tanto como decir que gran parte de la población en edad de trabajar podía hacerlo, tanto hombres como mujeres. Con el cambio de sistema era inevitable la caída de la tasa de partici-

<sup>1</sup> Los diez países candidatos a la ampliación de la Unión Europea eran: Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y Polonia, que forman el grupo de Visegrado, los tres bálticos -Estonia, Letonia y Lituania- y dos balcánicos -Bulgaria y Rumania-, si bien, finalmente, en diciembre de 2002 el Consejo Europeo de Copenhague acordó que aquellos ocho primeros ingresaran en 2004, posponiendo la entrada de los dos últimos hasta 2007.



pación porque las nuevas relaciones de mercado exigían un modelo de crecimiento intensivo, en el que se buscaban mejoras continuas de productividad y para lograrlas había que ajustar las plantillas sobredimensionadas, así como modernizar las actividades más obsoletas. De modo que, tal y como se esperaba, el deterioro del mercado de trabajo se hizo especialmente relevante al comienzo de la transición, pero no sólo por el contraste con la situación de pleno empleo del régimen anterior, sino también por la gran destrucción de empleo formal que acompañó a las fuertes pérdidas productivas observadas en los primeros años de la década. El impacto fue mayor de lo previsto y, desde luego, para los individuos y para la sociedad no fue menos doloroso por el hecho de que se hubiera contado con ello de antemano.

El periodo analizado puede dividirse en dos fases: la primera fue claramente recesiva y transcurrió durante los años 1990-1993, que soportaron el inicio de los programas de reforma y recibieron los impactos más fuertes de las políticas de austeridad. A lo largo de ese tiempo se pudo contener la inflación pero a costa de descensos significativos del PIB. La segunda etapa es bastante distinta a la anterior ya que permite identificar signos de recuperación de distinta intensidad según los países a lo largo del intervalo 1994-2001.

Si se comparan las tendencias de la producción y el empleo se puede observar cómo durante la fase recesiva la caída del empleo fue más lenta que la correspondiente a la producción, excepto en Hungría, Eslovaquia, Polonia y Eslovenia, gracias a que los poderes públicos evitaron con distintas medidas el desplome del nivel de ocupación con el fin de paliar las tensiones sociales que ello pudiera suponer.

Esa divergencia en el comportamiento de ambos agregados se observa también durante la etapa de recuperación, puesto que el movimiento ascendente del crecimiento productivo no ha sido secundado de manera automática por el mercado de trabajo, sino que se ha seguido destruyendo empleo, sin compensarlo con la generación suficiente de nuevas ocupaciones. De ese modo, al final del período todos los países están bastante alejados de los niveles que tenían al comienzo de la transición. Así, los países de Visegrado que han conseguido recuperar y superar los índices de la actividad productiva existentes en 1989, lo cual manifiesta que se encuentran en una senda de crecimiento, acumulan unas pérdidas de empleo bastante notables, que van desde algo más del 13% en Chequia y Polonia, hasta el 26% de Hungría. Los países balcánicos y Estonia ofrecen peores perspectivas puesto que todavía sus valores del PIB están muy por debajo de los registrados en 1989 (entre el 22% y el 11% menos) y ello se traduce en pérdidas ocupacionales mucho mayores: 34% en Bulgaria, 27% en Estonia y 21% en Rumania. Los otros dos países bálticos tienen los mayores diferenciales productivos respecto a sus niveles de partida (el 30%), por lo tanto su situación es mucho más desfavorable, aun-

que dentro de su estrecho margen de maniobra han conseguido suavizar el potencial de caída del empleo, de modo que han podido detener sus pérdidas en niveles inferiores al 26% en Letonia y al 19% en Lituania.

CUADRO 1: EVOLUCIÓN DEL PIB, EL EMPLEO Y EL SALARIO					
(ÍNDICES: 1989 = 100)					
	1993		2000	2001	2001
	PIB real	Empleo	PIB real	PIB real	Empleo
<b>Visegrado</b>					
Chequia	87,1	89,7	97,8	101,2	86,5
Eslovaquia	75	87,7	102,6	105,7	84,7
Eslovenia	84,3	81,3	114,3	116,8	81,7
Hungría	81,9	73,2	104,2	108,9	73,8
Polonia	87,6	84,3	126,6	129,1	86,3
<b>Balcánicos</b>					
Bulgaria	73,3	73,8	70,9	73,7	66,1
Rumania	76,1	91,9	76,9	80	79,3
<b>Bálticos</b>					
Estonia	63,2	84,5	83	86,7	73,2
Letonia	51,1	85,6	64,1	68,3	73,9
Lituania	59,1	93,4	64,9	67,5	80,7

Fuentes: para el PIB, UNECE: *Economic Survey of Europe*, 2002, nº 1; para el empleo, EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS: *Enlargement Papers*, nº 9, abril 2002; para el salario, UNICEF: *Social Monitor* 2002.

A la vez que se ha ido generalizando el deterioro del empleo en el sector formal, todos los países han experimentado aumentos importantes del sector informal, que son mayores cuanto menor sea el grado de recuperación económica y el avance de los programas de reforma. Apenas se cuenta con datos sobre las dimensiones de este sector, pero a título ilustrativo, las estimaciones elaboradas por organismos internacionales como el Banco Mundial indican que en Bulgaria, Hungría y Letonia puede representar alrededor del 30-40% del PIB.

La disminución del empleo que venimos comentando se ha trasladado solo en parte a cifras de desempleo, puesto que otras se han plasmado en disminución de la actividad económica, es decir, aumento de la población inactiva. Estas salidas del mercado laboral responden a motivos diversos. Algunas son voluntarias como las jubilaciones, las de personas que han abierto un negocio, o las mujeres de los ejecutivos y empresarios. Otras son salidas forzadas como las que se han observado entre las mujeres desempleadas que no pueden hacer compatible la búsqueda de un nuevo empleo con sus obligaciones de atención y cuidados familiares, toda vez que las ayudas estatales han sido arrastradas a la baja por las políticas fiscales restrictivas. Otras son exclusiones conscientes a las que se resignan los trabajadores desanimados que han ido poniendo en marcha estrategias de supervivencia dentro del sector informal.



## 1.2. DESEMPLEO

Las cifras de desempleo han aumentado con el avance de las reformas, debido a que las economías se han ido desprendiendo de las actividades más obsoletas y la reestructuración de las empresas privatizadas ha exigido regulaciones de plantilla. El total de desempleo registrado en los diez países afecta aproximadamente a 4-5 millones de personas (Galgóczi, p.8). La mitad de esos países tienen tasas elevadas de dos dígitos, pero la otra mitad muestra tasas relativamente bajas, cercanas a la media de la Unión Europea, por causas bastante diferenciadas entre sí. En el caso de Chequia, los poderes públicos han evitado la proliferación de despidos para suavizar el coste social de la transición, a cambio de menores salarios, peores niveles de productividad y ciertos retrasos en la reestructuración industrial. De hecho, sus cifras de paro crecieron suavemente hasta 1997 y se han incrementado con más fuerza desde entonces, cuando -para frenar la crisis en que se estaban viendo involucrados- acometieron medidas que mejoraban su competitividad pero reducían sus niveles de ocupación. Hungría registró importantes subidas del paro en los años más duros de la transición, pero en la medida en que modernizó sus capacidades productivas, gracias sobre todo a la inversión extranjera directa, ha podido crear puestos de trabajo en los últimos años. En los dos países bálticos (Estonia y Letonia) y en Rumania las cifras oficiales de desempleo suelen ser bastante bajas porque los parados cuentan con pocos incentivos para registrarse en las oficinas de empleo, ya que apenas van a obtener ventajas con ello, ni por la vía de subsidios, ni en mayores facilidades para la obtención de otro puesto de trabajo.

En cualquier caso, cabe constatar que hay una parte importante de la población afectada por la situación de desempleo, que suele estar formada por los grupos sociales más débiles, como los jóvenes, las mujeres y los trabajadores de menor cualificación. Además, se calcula que alrededor del 30% de esos desempleados son de muy difícil reubicación por la falta de coincidencia entre las capacidades que ofrecen y las necesidades actuales de la demanda de trabajo. Por otro lado, cabe hacerse eco de las disparidades regionales existentes en todos los países en la distribución del desempleo, con zonas en las que las pérdidas de tejido productivo han sido tan fuertes que apenas cabe hablar de resquicios de recuperación, ni de generación de nuevas oportunidades, con lo cual sus habitantes atraviesan situaciones realmente dramáticas cuya salida es el sector informal y la emigración interna o hacia otros países. Así ocurre en las zonas más orientales de toda la región, que están más alejadas geográficamente (y también en sus intercambios económicos) de sus vecinos occidentales pertenecientes a la Unión Europea.

CUADRO 2: EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO

	(% DE LA POBLACIÓN ACTIVA)											
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<b>Visegrad</b>												
Chequia	0,7	4,1	2,6	3,5	3,2	2,9	3,5	5,2	7,5	9,4	8,8	8,9
Eslovaquia	1,6	11,8	10,4	14,4	14,8	13,1	12,8	12,5	15,6	19,2	17,9	18,6
Eslovenia	--	10,1	13,3	15,5	14,2	14,5	14,4	14,8	14,6	13	12	11,8
Hungría	1,7	7,4	12,3	12,1	10,9	10,4	10,6	10,4	9,1	9,6	8,9	8
Polonia	6,5	12,2	14,3	16,4	16	14,9	13,2	10,3	10,4	13,1	15,1	17,4
<b>Balcánicos</b>												
Bulgaria	1,8	11,1	15,3	16,4	12,8	11,1	12,5	13,7	12,2	16	17,9	17,3
Rumania	1,3	3	8,2	10,4	10,9	9,5	6,6	8,8	10,3	11,5	10,5	8,6
<b>Bálticos</b>												
Estonia	--	--	1,6	5	5,1	5	5,6	4,6	5,1	6,7	7,3	7,2
Letonia	--	--	2,3	5,8	6,5	6,6	7,2	7	9,2	9,1	7,8	7,7
Lituania	--	--	3,5	3,4	4,5	7,3	6,2	6,7	6,9	10	12,6	12,9

Elaboración propia a partir de UNECE: *Economic Survey of Europe*, 2002, nº1.

### 1.3. SALARIOS

Las variaciones de precios y de los tipos de cambio de las monedas, unidas al control de costes laborales exigido por los programas de ajuste, han ido provocando un continuo deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Esa disminución de las retribuciones reales, observada en todos los países, se ha visto agravada por prácticas bastante anómalas a las que recurrieron las empresas para afrontar la recesión, tales como los retrasos de varios meses en los abonos de las nóminas, los pagos en especie, y el mantenimiento del tamaño de las plantillas a costa de obligar a los trabajadores a aceptar períodos indefinidos de vacaciones no retribuidas.

Por otra parte, el proceso de trasvase de los trabajadores desde el antiguo sector estatal al sector privado, que predomina en el sistema actual, introduce cambios importantes en el régimen retributivo, con una mayor dispersión respecto al salario medio entre sectores. Desde un sistema salarial bastante igualitario, con escasas diferencias según las cualificaciones, las categorías profesionales o las actividades, se ha pasado a un modelo mucho más heterogéneo, no solo en el interior de las empresas, cuya estructura remunerativa adopta una forma más vertical con fuertes diferenciales entre los sueldos de los directivos y los trabajadores según su nivel de cualificación, sino también entre los distintos sectores. El proceso de transición ha generado la contracción de la actividad de unas ramas productivas (algunas de la industria pesada, o las que habían alcanzado la fase de madurez en su ciclo vital), mientras que ha reforzado la posición de otras en la estructura económica (como las de servicios, en especial los financieros y otros tipos de especializaciones más intensivas en tecnología), añadiendo nuevos focos que amplían las distancias entre remuneraciones.

El colapso del mercado de trabajo ha supuesto una notable reducción de los ingresos individuales y familiares, a la vez que ha determinado situaciones



de exclusión y ha empeorado las condiciones de vida de la población no propietaria con rentas exclusivamente laborales. Por supuesto, que los salarios no son la única fuente de ingresos, pero sí son la más importante en estos momentos para la mayoría de la población de las economías del Este. Se calcula que en estos países el mercado de trabajo es la fuente principal del 60-80% de los ingresos familiares (World Bank, 2000: 143), debido a la incipiente experiencia de la mayoría de las familias en el manejo de otros mecanismos de obtención de rentas como los derechos de propiedad, el uso de los créditos al consumo y las bolsas de valores. Además, otras partidas derivadas de la actividad redistributiva del estado han sufrido fuertes recortes para mantener controlado el déficit público en aras de los objetivos de estabilización macroeconómica. Por lo tanto, la contracción de la actividad laboral y el recorte del poder adquisitivo de los salarios son factores claves para explicar el deterioro del nivel de vida y la disminución del bienestar de muchos ciudadanos de la Europa del Este.

Durante la fase recesiva, las caídas de los salarios fueron más pronunciadas que las experimentadas por la producción (Cuadros 1 y 3). Al considerar la evolución de los resultados de los diez países, se observa que Hungría registró los descensos más pequeños, aunque también fueron relevantes, ya que en tres años de aplicación de las reformas, los salarios redujeron en un 17% su capacidad adquisitiva. Los valores máximos fueron alcanzados por Lituania con un 72% de merma en las retribuciones. Entre esos dos extremos se sitúan el resto de países con un deterioro medio en torno al 30%. Por lo tanto, la población de todos ellos soportó una carga pesada en los primeros años de la transición al afrontar recortes drásticos de ingresos que afectaron al consumo familiar y que se tradujeron en una dieta alimenticia más débil en calorías, y menos dinero para satisfacer otras necesidades básicas como vestidos, medicinas, mantenimiento de la vivienda, gastos en educación y otros.

CUADRO 3: EVOLUCIÓN DEL SALARIO REAL

(ÍNDICES, 1989 = 100)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
<b>Visegrado</b>											
Chequia	93,6	68,9	76	78,8	84,9	92,2	100,4	102,3	101	107,1	109,7
Eslovaquia	94,2	67,3	72,6	69,2	71,4	75,3	81,9	87,4	88,8	86,1	81,9
Eslovenia	73,8	61,8	61,3	70,4	75,4	79,4	83,1	85,4	86,7	89,4	90,6
Hungría	94,3	87,7	86,5	83,1	89,1	78,2	74,3	77,1	79,6	81	83,9
Polonia	75,6	75,4	73,3	71,2	71,6	73,7	77,9	82,4	85,2	95,8	98,6
<b>Balcánicos</b>											
Bulgaria	111,5	68	76,7	77,6	63,7	60,2	49,6	40,1	47	52,2	54,6
Rumania	105,2	88,9	77,3	64,4	64,6	72,7	79,8	62,3	61,1	62,3	65,5
<b>Bálticos</b>											
Estonia	102,5	68,2	45,2	46,3	50,9	54	55,2	59,5	63,5	66,2	70,3
Letonia	105	71,9	49	51,8	57,9	57,7	54,1	60,7	63	65	67,1
Lituania	108,8	75,3	46,6	28,4	32,5	33,5	34,8	39,5	44,6	47,8	46,9

Fuente: UNICEF. Social Monitor 2002.



La fase de recuperación productiva ha servido también para que se consiga un cierto repunte de los salarios, aunque su ritmo de mejora sea más lento y se mantenga por detrás del recorrido efectuado por el PIB. Solamente la República Checa altera dicha tendencia puesto que en 1996, el salario real había recuperado el nivel que tenía antes del comienzo de las reformas y continuó superándolo en años posteriores, lo cual resulta significativo si tenemos en cuenta que ese país en el cómputo de la actividad productiva no ha conseguido rebasar ese nivel de referencia hasta el año 2001, es decir, cinco años después de que lograra recuperar el poder adquisitivo de los salarios.

En el resto de países, incluso los otros del grupo de Visegrado que han remontado las cifras productivas previas a la transición, todavía en el año 2000 al salario real le faltan algunos puntos para equipararse con el correspondiente al que tenían en el año tomado como base: solo un 2% en el caso de Polonia, pero un 10% en Eslovenia, un 15% en Hungría y un 19% en Eslovaquia. La situación es menos afortunada en los países bálticos y balcánicos, ya que siguen alejados un 39% como media respecto al punto de partida. En todos ellos, las mejoras que han experimentado los salarios se han quedado por detrás de los aumentos de la productividad del trabajo, de modo que la diferencia resultante ha reforzado los beneficios empresariales y si bien ha podido servir para mejorar la competitividad de esas economías, también ha contribuido al reparto asimétrico favoreciendo las rentas de capital frente a las del trabajo.

Aunque la tendencia global señala aumentos moderados de los salarios, las diferencias entre categorías profesionales se han ido agudizando en la segunda mitad de los noventa, registrándose incrementos de ingresos en los directivos que llegan a sobrepasar en más de diez veces las retribuciones del personal cualificado, quienes, a su vez, se van separando de los sueldos que reciben los trabajadores menos cualificados. Por otra parte, hay categorías profesionales que han perdido notoriedad como las de los ingenieros, mientras que otras se vuelven más relevantes y aumenta su cotización como las de abogados, economistas y personal relacionado con actividades financieras. Esa tendencia a la segmentación de ingresos se ve reforzada con el progresivo aumento de la discriminación salarial de las mujeres, que se va acercando a los estándares de sus vecinos occidentales, lo cual refleja la erosión que el cambio de sistema económico provoca en la participación de mujeres y hombres en términos de igualdad que el viejo régimen había posibilitado. Mientras que entonces los diferenciales de ingresos no eran mayores de un 3-4%, los datos para el año 1999 (EUROSTAT, 2001) indican que, sin incluir a Bulgaria, por término medio el salario de las mujeres en los PECO es el 79% del correspondiente a los hombres, en un rango que va desde el 75% de Lituania hasta el 88% de Eslovenia, que es similar al que registran los miembros actuales de la Unión Europea, cuyo rango va desde el 71% de Irlanda al 88% de Dinamarca.



A su vez, el salario mínimo en los PECO ha ido declinando paulatinamente, de manera que en el año 2001 sus niveles se situaban en un abanico que iba desde el 26% al 50% del salario medio, lo cual significa que en muchos casos no llega a cubrir el mínimo de subsistencia, de modo que los empleados que reciben sólo esa retribución se ven abocados a situaciones de pobreza, a no ser que implementen estrategias de supervivencia vinculadas a la economía sumergida.

#### 1.4. ACTIVIDAD LABORAL DE LAS MUJERES

El proceso de transición económica ha cambiado sustancialmente la relación de las mujeres con el mercado laboral, puesto que padecen con mayor intensidad los efectos negativos que venimos señalando sobre el empleo y los salarios. En el antiguo sistema, trabajaban a tiempo completo y durante toda su vida activa, de tal modo que las tasas de participación femenina eran casi iguales a las masculinas y resultaban sorprendentes comparadas con cualquier indicador internacional. Ese nivel de integración era posible por la amplitud de las ayudas familiares y los recursos sociales disponibles para hacer compatible el trabajo fuera del hogar con el cuidado de niños y personas dependientes: guarderías, permisos de maternidad y paternidad con retornos garantizados al puesto de trabajo y otros.

Conviene aclarar de todos modos que la participación masiva de las mujeres respondía mucho más a las exigencias del modelo de crecimiento extensivo, consumidor de grandes cantidades de inputs, trabajo y capital, que a la voluntad del sistema por favorecer su autonomía. Prueba de ello es que ocupaban los empleos con salarios más bajos y con menor reconocimiento social, y tenían escasa representación en puestos de toma de decisiones. Además, tampoco se transformaron los roles de hombres y mujeres en el seno del hogar, de manera que las mujeres no se libraban de la carga de la *dobles jornada*, pues seguía recayendo sobre ellas el trabajo doméstico a pesar de las muchas horas ocupadas en su actividad profesional. Las estimaciones indican que las mujeres del Este de Europa trabajaban, dentro y fuera de su casa, una media de 70 horas a la semana, lo cual era alrededor de 15 horas más que las mujeres de Europa occidental (UNICEF, 1999: 25).

El cambio de sistema ha limitado los puestos de trabajo, de manera que en los mercados laborales hay ahora muchos trabajadores compitiendo por menos empleos. La situación se ha hecho más complicada y la población tiene que aprender a manejar los nuevos esquemas que si bien abren oportunidades, como el autoempleo o prácticas empresariales, también suponen tener que enfrentarse a obstáculos desconocidos, como la precariedad de los contratos y la inseguridad en la conservación del empleo. Para las mujeres no solo se han vuelto más adversas las condiciones del trabajo remunerado, sino que la carga familiar se ha hecho más pesada debido a que la reducción de sus ingresos y la menor ayuda suministrada por los servicios públicos tiene que ser compensa-

da con mayores aportaciones de tiempo y esfuerzo por su parte. Para muchas de ellas, la suma de obstáculos para desempeñar el trabajo productivo y el reproductivo les ha hecho imposible compaginar sus tareas familiares y laborales y no les ha quedado otra opción que atender en exclusiva a las responsabilidades domésticas, dejando de pertenecer a la población activa.

Entre 1989 y 1997 la tasa de actividad femenina descendió más que la masculina y esos descensos afectaron, por un lado, a las mujeres jóvenes, a quienes les resultaba muy difícil acceder al mercado de trabajo y, por otra parte, a las mayores de 50 años que salieron de él en muchos casos para dedicarse a cuidar a sus nietos o a los hijos de otros familiares o amigos. De todos modos, el ritmo de decrecimiento del empleo fue más rápido que el de la población activa femenina, ya que muchas mujeres permanecieron en el mercado de trabajo pero engrosando las cifras de desempleo. En toda la región del antiguo Bloque de Este, los PECO y los CIS, se han perdido 14 millones de empleos femeninos, la mayor parte de ellos se localizan en Rusia, pero hay países que contabilizan cifras también muy significativas, como Hungría con 900.000 y Polonia con 1.600.000 (UNICEF, 1999: 27). Esos descensos fueron muy bruscos al principio de la transición, pero también se ha seguido destruyendo empleo femenino en el periodo de recuperación, aunque con una cadencia más moderada; por el contrario, los hombres en esa segunda etapa han tenido mayores oportunidades que han suavizado el avance del número de parados. A pesar de los avatares comentados, como se partía de cifras muy elevadas, la tasa de participación femenina alcanza en la actualidad un nivel entre el 40% y el 50%, que resulta aceptable comparado con el de muchos países occidentales, aunque ello no alivia el impacto sufrido por las personas que se han quedado sin trabajo y han sido expulsadas de la vida laboral.

En cuanto a las características de las mujeres desempleadas cabe señalar que 2/3 de ellas afrontan condiciones de paro de larga duración y tienen muchas dificultades para acceder a un nuevo empleo, en especial las madres jóvenes con niños a su cargo. Por otro lado, las mujeres con empleo están concentradas en el sector servicios, en la administración pública, en actividades como la enseñanza y otras que conllevan tareas de cuidados, la hostelería, el comercio y los servicios financieros. En la industria claramente el grueso del empleo lo realiza la población masculina; mientras que en algunos países hay una buena representación de empleo femenino dentro del sector agrario, en granjas familiares, como ocurre en Polonia, Rumania, Eslovenia y Lituania.

## 2. GASTO PÚBLICO SOCIAL

### 2.1. MENOR DIMENSIÓN Y PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO

A lo largo de la década pasada el sector público ha visto mermada su presencia no solo por el propio recorte de su dimensión, sino también por la limi-



tación de sus atribuciones. Ha dejado de tener un carácter central en la orientación y el control de la vida económica para desempeñar funciones subsidiarias en línea con el papel que se le reserva habitualmente en el sistema de economía de mercado.

La proporción del gasto público sobre el Producto Interior Bruto, que se considera un indicador tradicional sobre el tamaño del sector público, ha ido descendiendo desde el principio de los años noventa, de tal modo que partiendo de las elevadas cotas que tenía en el régimen anterior -un 53% del PIB como media de los diez países considerados en 1989 (World Bank, 2000: 132)-, ha llegado a ser incluso más reducida que la de algunas economías occidentales. No podemos olvidar además que la disminución de su valor real ha sido bastante más pronunciada que la reflejada en esas menores proporciones, dado que a su vez el agregado de referencia sobre el que se efectúa la comparación, el PIB, ha sufrido un enorme retroceso. Según la clasificación empleada por Tanzi y Schuknecht<sup>2</sup> el tamaño del sector estatal de estas economías se sitúa en la categoría de "pequeño" (el gasto público estaría en torno al 40% del PIB), frente a los tamaños "medio" (proporción entre el 40 y el 50%) y "grande" (por encima del 50%). Ahora bien, con relación al tema que nos ocupa, lo relevante no solo es la dimensión, sino también el destino que se le asigne. En este sentido, los autores mencionados, en otros trabajos anteriores<sup>3</sup> al citado sobre la composición del gasto público en economías industrializadas, habían llegado a la conclusión de que el aumento sin límite de las partidas sociales no contribuía de manera automática a mejorar los indicadores relativos a la desigualdad y a la pobreza, incluso, señalaban que los gobiernos no debían dedicar más del 30% del PIB a gastos sociales si querían conseguir objetivos satisfactorios en ese terreno. Lo cual indica que si bien el significado inmediato de la disminución del gasto público es el de su contribución al aumento de la desigualdad, conviene, no obstante, relativizar su impacto valorando los cambios que hayan podido producirse en su composición y, sobre todo, el reflejo específico que ha tenido en los programas sociales.

## 2.2. ESTRECHEZ PRESUPUESTARIA

El gasto público afrontó las caídas más fuertes en los primeros años de la transición pagando así su tributo a la lucha contra la inflación que exigía una política fiscal contractiva. En la medida en que se fue conteniendo la escalada de precios y las cifras del IPC eran más manejables, los gobiernos se pudieron permitir el aumento paulatino del gasto, pero siempre con cautela, sin grandes euforias para no hacer saltar de nuevo la alarma de la infla-

<sup>2</sup> Tanzi, V. y Schuknecht, L. (2000), *Public Spending in the 20<sup>th</sup> Century: a Global Perspective*, Cambridge University Press, New York, citado por Gupta S. et al, 2001, nota 5 p. 3.

<sup>3</sup> Tanzi, V. y Schuknecht, L. (1997), "Reconsidering the Fiscal Role of Government: The International Perspective", *American Economic Review, Papers and Proceedings*, vol. 87, pp.164-68.

ción. Ese margen limitado de expansión contrasta con el aumento de la demanda de prestaciones sociales derivadas de los desequilibrios en la distribución de la renta que ha traído consigo el cambio de sistema. De tal modo que, los gobiernos han tenido que asumir una determinada provisión de servicios que antes era competencia de las empresas públicas, tales como guarderías, centros de salud, viviendas sociales, etc. A ello se han sumado las necesidades de protección de la población afectada por la crisis productiva y el deterioro de las condiciones de empleo. El aumento de la desigualdad ejerce así una fuerte presión sobre el tamaño del sector público exigiéndole que destine una mayor proporción del gasto a programas redistributivos, en la medida en que ello sea posible aprovechando las rachas de recuperación productiva y evitando sobrepasar ciertos límites que pudieran perjudicar el clima de estabilidad macroeconómica.

Las políticas para frenar la inflación han tenido que recaer sobre la contención del gasto porque ha sido en la práctica la única vía posible para frenar el déficit, ya que los gobiernos han demostrado una escasa capacidad recaudatoria, con lo cual apenas han visto aumentar sus ingresos. Los motivos pueden concretarse en los siguientes<sup>4</sup>:

- a) El sistema impositivo no llega a fiscalizar a todos los tipos de negocios que se han ido poniendo en marcha en el proceso de expansión de la iniciativa privada, de tal modo que quedan fuera de su control muchas actividades de nueva creación y, en especial, las que forman la economía informal.
- b) Existe una alta presión fiscal relativa sobre las rentas del trabajo mientras que, por el contrario, son escasos los beneficios y las garantías sociales que pueden percibir los trabajadores, lo cual fomenta la evasión, siempre que la debilidad del control administrativo lo haga posible.
- c) Se siguen utilizando procedimientos de ajuste de percepciones en especie, a través de las cuales se compensan las obligaciones de los impagos impositivos de las empresas con los compromisos que hubieran asumido con ellas los gobiernos.
- d) El método de recaudación debe mejorar su diseño pues con el actual las autoridades tienen escasa información y capacidad para controlar la complejidad evasiva creada entre los contribuyentes y los bancos que actúan como intermediarios recaudadores.

### 2.3. IMPACTOS SOCIALES DEL PRESUPUESTO

En la composición del gasto se puede observar que ha habido una disminución o mantenimiento de las transferencias familiares y también de la inversión; mientras que han aumentado las partidas de sueldos y salarios y el pago de intereses. Aunque no disponemos de datos suficientes que permitan la desagregación de las diferentes partidas según su asignación por

<sup>4</sup> Gupta, S. et al (2001), pp.14 y 15.



grupos de ingresos, sí parece constatada la escasa efectividad de los fondos para corregir desequilibrios de renta ya que muchas de las ayudas no se han orientado a la población más pobre sino que se han destinado a otros estratos de ingresos medios o, incluso de ingresos altos (World Bank, 2000: 132)<sup>5</sup>. Eso parecen indicar los subsidios generales que mantienen algunos países sobre la calefacción, la vivienda, el transporte, etc. que detraen importantes recursos y, sin embargo, benefician a todos los usuarios sin distinción, incluso a aquellos que no necesitarían tales apoyos. Otras partidas se dirigen a mantener determinados privilegios en ciertos grupos con una posición de fuerza en la sociedad, como pensiones a antiguos parlamentarios y a jueces, o también acuerdos sobre prejubilaciones especiales para impulsar las reestructuraciones de algunas empresas, o concesión de ventajas para atraer inversión extranjera. De igual modo, se mantienen subsidios a empresas con la excusa de abaratar costes y evitar mayores despidos, pero que se han utilizado a veces para incrementar los ingresos de los directivos. En fin, el aumento de la desigualdad generado a lo largo de la transición exigiría para afrontarlo una mayor racionalización del gasto, asignando los recursos según un orden de prioridades que conectara el derecho de percepción con las necesidades reales de los destinatarios.

Por la parte de los ingresos, el sistema impositivo parece guiarse por criterios de eficiencia más que de equidad, ya que ha ido mostrando un perfil cada vez más regresivo con lo cual ha ayudado bien poco a la redistribución de las rentas. Así, en líneas generales que deberían ser matizadas según los países, los impuestos directos han cedido terreno a favor de los indirectos, como el IVA, de modo que esos gravámenes sobre el consumo se convierten en una carga añadida para la población más pobre porque menguan aún más la capacidad de compra de sus escasos ingresos. Ese carácter poco proclive a la compensación de la desigualdad se refleja de nuevo al observar que la presión fiscal sobre las empresas se ha debilitado en términos relativos al peso que han ido adquiriendo los impuestos sobre las rentas personales. A su vez, en estas últimas son los tramos de rentas laborales medias los que soportan el grueso de las contribuciones, puesto que los escalones de ingresos elevados y otras fuentes de rentas pueden utilizar con más facilidad distintos procedimientos, o incluso sus influencias, para asumir menor gravamen del que les correspondería.

Resulta significativa también la disminución de empleo en el sector público, en especial en las actividades de educación y sanidad, no sólo por su contribución al deterioro de la situación laboral, sino porque pone de manifiesto que esos recortes de personal en la prestación de servicios tan básicos determinan peor asistencia o menor población atendida, con nefastas consecuencias. Ese espacio dejado en su repliegue por el sector público está siendo

<sup>5</sup> Esa misma idea es señalada por Gupta, S. et al (2001), pp. 30 y 31.

ocupado por clínicas y escuelas privadas a las que solo tienen acceso personas con un nivel elevado de ingresos. De manera que se favorece una estratificación social más marcada, con grupos sociales que disfrutan de atención sanitaria adecuada y que reciben formación de calidad, mientras que amplios núcleos de población se ven privados de esa atención gratuita y no pueden afrontar su coste.

CUADRO 4: EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO (% SOBRE LA POBLACIÓN)

	EMPLEO PÚBLICO TOTAL			EDUCACIÓN			SANIDAD		
	1990 -1995	1995 -1999	n° (miles)	1990 -1995	1995 -1999	n° (miles)	1990 -1995	1995 -1999	n° (miles)
<b>Visegrado</b>									
Chequia	4,3	8,7	448	1,7	0,7	-99	1,2	0,3	-91
Eslovaquia	8,6	1,6	-389	3,2	--	--	2,4	--	--
Eslovenia	8,9	4,5	-49	2,5	1,3	-24	2,7	0,9	-35
Hungría	8,7	8	-83	2,9	2,3	-63	2,4	2,2	-21
Polonia	4,9	3,4	-568	1,6	1,2	-149	2	0,9	-440
<b>Balcánicos</b>									
Bulgaria	7,7	4,2	-315	3	1	-172	2,3	1,1	-108
Rumanía	3,3	3,9	128	1,4	1,1	-85	0,7	0,6	-25
<b>Bálticos</b>									
Estonia	7,8	1,8	-94	2,8	--	--	1,9	--	--
Letonia	8,2	4,9	-95	3,5	1,5	-55	2,8	0,9	-53
Lituania	8,3	9	24	3,8	3,9	5	2,8	2,5	-11
OCDE	6,5	7,8	12.289	1,7	1,7	660	0,6	0,7	826

Fuente: Gupta S. et al., 2001.

El volumen de gasto público no es el único factor que determina el alcance y la calidad de la educación y la sanidad, pero no cabe duda de que influye poderosamente, en especial, en la cobertura de la población más marginada, a la que no se suelen dirigir los servicios dispensados por el sector privado. La retirada de recursos públicos ha hecho que ahora las familias tengan que pagar algunas tasas de matrícula, pero también libros de texto y otros bienes complementarios como ropa y zapatos adecuados para ir a la escuela, e incluso, alguna tarifa o donación de carácter informal para que los profesores, o los médicos y enfermeras se tomen con más interés sus tareas. Distintos informes elaborados por UNICEF y el Banco Mundial recogen experiencias que confirman esos complementos de sueldos que recaen también sobre las familias y que se van generalizando en costumbres absolutamente perniciosas y discriminatorias para la población que no las sigue. En definitiva, el deterioro de dichos servicios para un buen número de personas no solo refuerza su marginación y exclusión en el momento presente, sino que también está limitando sus oportunidades para salir de ella y posiblemente condenando a la pobreza a las generaciones futuras.



### 3. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

#### 3.1. INDICADORES

El coeficiente de Gini proporciona una aproximación general sobre cómo ha evolucionado la distribución de la renta en los países de la región<sup>6</sup>. Los datos disponibles muestran que se ha producido un aumento de la desigualdad, habiendo pasado de niveles semejantes a los que tienen las economías más igualitarias de la OCDE -como Alemania y las escandinavas-, hasta acercarse a los registros de países europeos mediterráneos como Italia y Francia, que presentan mayores disparidades de renta. Esa mayor desigualdad ha avanzado con rapidez en Polonia, los balcánicos y los bálticos, con un ritmo que supera incluso al que experimentaron en los años ochenta -década especialmente adversa en el aspecto distributivo-, los países desarrollados con coeficientes más elevados como es el caso de Estados Unidos y el Reino Unido.

Al mismo tiempo, cabe señalar que antes de la transición los coeficientes de los países de la región mostraban un estrecho rango de variación, mientras que con posterioridad se aprecia una mayor dispersión entre los coeficientes, con un rango que va del 0,23 de Chequia, que refleja la situación más equitativa, al 0,39 registrado por Estonia, que corresponde al mayor índice de desigualdad. Hacia este extremo superior se van moviendo los coeficientes de los otros dos países bálticos, los balcánicos y Polonia, mientras que se aproximan al límite inferior Eslovaquia, Eslovenia y Hungría.

Otro indicador de distribución es el que expresa la diferencia entre los dos grupos extremos de la escala de rentas cuando se clasifica a la población en diez grupos de ingresos. De ese modo, se aprecia que la diferencia entre los ingresos percibidos por el decil superior y el decil inferior en cada país se ha ido incrementando a lo largo de la transición, en la medida en que el grupo inferior ha ido reduciendo su cuota en la distribución de la renta a la par que el grupo superior ha ido incrementando la suya, ensanchándose por ello la divergencia entre ambos. En promedio, a finales de la década de los ochenta el decil inferior obtenía el 4,6% del ingreso en el conjunto de los PECO, mientras que diez años después su participación se ha reducido al 3,6%. Por su parte, el decil superior ha ido acaparando una proporción cada vez mayor, pasando del 19,1%, como promedio inicial, al 24,4% como promedio al final del periodo. Esto significa que el grupo inferior ha experimentado una pérdida de más del 20% en su cuota relativa, a la vez que el grupo superior ha mejorado la suya en un 26%.

<sup>6</sup>  $CG = \frac{2}{\mu^2} \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i - \frac{n+1}{n}$ ; siendo  $\mu$  el ingreso medio de la población,  $n$  el número de hogares,  $i$  el número de grupos de ingresos y  $x_i$  el ingreso de cada grupo; de modo que el coeficiente oscila entre 0, que indica la máxima igualdad, y 1 que señala la máxima desigualdad.



CUADRO 5: DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA: COEFICIENTE DE GINI

	1989	1997	2000
<b>Visegrado</b>			
Chequia	0,2	0,24	0,23
Eslovaquia	--	0,25	0,26
Eslovenia	--	0,24	0,25
Hungría	0,22	0,25	0,26
Polonia	0,27	0,33	0,35
<b>Balcánicos</b>			
Bulgaria	0,23	0,36	0,33
Rumania	0,24	0,31	0,31
<b>Bálticos</b>			
Estonia	0,28	0,36	0,39
Letonia	0,26	0,33	0,33
Lituania	0,26	0,31	0,36

Fuente: UNICEF, Social Monitor 2002.

También desde este indicador se comprueba que los países que se alejan más de los valores medios de la región, reflejando una situación más desigual, son los tres bálticos, Rumania y Polonia, mientras que Chequia y Hungría tienen diferencias menores. Los datos de Bulgaria muestran que la brecha social se amplió profundamente en los años recesivos, pero que parece haberse ido mitigando desde mediados de la década, si bien los datos deben tomarse con las cautelas oportunas que aconsejan la débil fiabilidad que todavía existe en la información estadística de la región.

Si la distribución de la renta se realiza por quintiles, dividiendo a la población en cinco grupos de ingresos, los resultados que se obtienen confirman la misma tendencia: el crecimiento paulatino de la desigualdad en la distribución de la renta. En 1998, el quintil más alto (el 20% más rico) concentraba como media el 38% del ingreso, mientras que el quintil más bajo (el 20% más pobre) obtenía sólo el 9% del ingreso.

Comparando estos datos con los que presentan otras zonas del mundo se constata que no se trata de una polarización extrema como la que presentan, por ejemplo, muchos países latinoamericanos, o incluso EE.UU., donde el coeficiente Gini se acerca o supera el límite de 0,5 y donde la cuota de renta del quintil más rico se sitúa por encima del 45%. Lo cual nos indica que los quintiles intermedios en los PECO captan un porcentaje de renta mayor que en esos otros países citados. En cambio la semejanza es mayor cuando se considera el precario 9% percibido por el quintil inferior, lo que se relaciona con la extensión de la pobreza entre segmentos importantes de la población.



CUADRO 6: PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO TOTAL (%)

	1988		1993		1998	
	10% + pobre	10% + rico	10% + pobre	10% + rico	10% + pobre	10% + rico
<b>Visegrado</b>						
Chequia	5,4	17,5	4,6	23,5	4,3 <sup>a</sup>	22,4 <sup>a</sup>
Eslovaquia	5,3	18	5,7	17,8	-	-
Eslovenia	4,5 <sup>a</sup>	20,0 <sup>a</sup>	4,3	21,2	3,9	23
Hungría	5,0 <sup>a</sup>	19,0 <sup>a</sup>	4,4	19,8	4,1	20,5
Polonia	4,1 <sup>a</sup>	21,1 <sup>a</sup>	3,2	22	3,2	24,7
<b>Balcánicos</b>						
Bulgaria	4,5 <sup>b</sup>	20,4 <sup>b</sup>	2,8	26,8	4,5 <sup>f</sup>	22,8 <sup>f</sup>
Rumania	4,0 <sup>b</sup>	19,2 <sup>b</sup>	3,5 <sup>c</sup>	22,5 <sup>c</sup>	3,2	25
<b>Bálticos</b>						
Estonia	4,2	18,4	2,1 <sup>d</sup>	25,9 <sup>d</sup>	3	29,8
Letonia	4,5	18,7	3,2 <sup>d</sup>	25,1 <sup>d</sup>	2,9	25,9
Lituania	4,6	19	2,4 <sup>e</sup>	28,4 <sup>e</sup>	3,1 <sup>e</sup>	25,6 <sup>e</sup>

<sup>a</sup> 1987; <sup>b</sup> 1989; <sup>c</sup> 1994; <sup>d</sup> 1995; <sup>e</sup> 1996; <sup>f</sup> 1997.

Fuente: Milanovic, B. (1998) para los datos hasta 1995; PNUD (2002) para años posteriores.

### 3.2. POBREZA

La aparición de la pobreza constituyó un hecho inusual en los Países de Europa Central y Oriental, pues era casi inexistente durante el antiguo régimen, ya que las políticas sociales compensatorias que aplicaban los gobiernos impedían que, a pesar del bajo nivel de renta que mostraba la mayoría de la población, hubiera personas por debajo de la línea de pobreza. Por esa razón, la ampliación de ésta no sólo ha supuesto la carencia de los mínimos recursos materiales por parte de un numeroso segmento de la población, sino también la destrucción de un estilo de vida que confería cierta seguridad para el conjunto de los ciudadanos. En la actualidad, los pobres de la Europa del Este tienen pocas posibilidades de superar su situación y se ven excluidos de la dinámica social, como si ya no fueran necesarios, de modo que los cambios que se están generando ignoran absolutamente su situación. Por ello, la posición a la que quedan relegados es la misma que ocupan los pobres de otras partes del mundo: fuera del acceso a los recursos y a los servicios básicos, niveles de vida míseros, problemas de salud, relaciones sociales limitadas etc., pero la diferencia con respecto a otras poblaciones es que en las economías en transición se han visto afectadas por la pobreza personas con unos ciertos niveles de formación, que son más conscientes del tremendo deterioro por el que están pasando sus estándares de vida.

El cálculo del volumen de población sumida en la pobreza depende del nivel de ingreso que se acepte como umbral. Como es sabido, hay distintas medidas recomendadas por los organismos internacionales y también otras que adaptan los niveles mínimos a las condiciones de ingreso y de consumo particulares de cada economía. Parece aceptado que en los PECCO no se puede señalar una línea de pobreza demasiado baja pues, debido a las duras condiciones climáticas de la región, hay una serie de gastos mínimos imposibles de evitar como fuentes de

calor, ropa de abrigo y comida rica en calorías, que requieren unos ingresos de supervivencia más altos que en otras zonas con temperaturas más cálidas. De ese modo, se establece un umbral de pobreza usado con profusión en distintas partes del mundo de 2-2,15 dólares per cápita al día, es decir, 60-64,5 dólares al mes, y otro que se adaptaría mejor a la especificidad de estos países de 4-4,30 dólares per cápita al día, unos 120-129 dólares al mes.

CUADRO 7: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA

	4 \$ per cápita al día				2,15\$ per cápita al día	
	1987/88	1993/95	1997/98c	1997/98	1997/98	1997/98
	(%)	(%)	(%)	nº personas	(%)	nº personas
<b>Visegrad</b>						
Chequia	0	<1	0,8 <sup>a</sup>	82.568	0 <sup>a</sup>	--
Eslovaquia	0	<1	8,6	462.594	2,6	139.854
Eslovenia	0	<1	0,7	13.895	0	--
Hungría	1	4 <sup>b</sup>	15,4	1.566.796	1,3	132.262
Polonia	6	20	18,4	7.113.440	1,2	463.920
<b>Balcánicos</b>						
Bulgaria	2 <sup>a</sup>	15	18,2 <sup>a</sup>	1.526.070	3,1 <sup>a</sup>	259.935
Rumania	6 <sup>a</sup>	59	44,5	10.024.070	6,8	1.531.768
<b>Bálticos</b>						
Estonia	1	37	19,3	280.622	2,1	30.534
Letonia	1	22	34,8	855.384	6,6	162.228
Lituania	1	30 <sup>b</sup>	22,5 <sup>a</sup>	832.725	3,1 <sup>a</sup>	114.731
<b>Total</b>				<b>22.758.164</b>		<b>2.835.232</b>

<sup>a</sup> 1989. <sup>b</sup> No incluye consumo en especie. <sup>c</sup> 4,30\$. <sup>d</sup> 1996. <sup>e</sup> 1999.

Fuente: Milanovic, 1998, p. 68; World Bank, 2000, p. 35; el nº de personas se ha calculado a partir de datos demográficos 1989-2000 de UNICEF Social Monitor 2002.

En los diez países considerados hay casi 23 millones de personas que viven con 4,30 dólares al día, cifra que, con la excepción de Chequia y Eslovenia, representa una proporción significativa de la población de cada país. Estos datos corresponden a 1998 y desde entonces es cierto que se perciben algunas mejoras que han repercutido en una cierta elevación de su bienestar social; o quizás sería mejor expresarlo como un paliativo de su nivel de malestar social. Las tasas de crecimiento económico logradas a finales del siglo han tenido su reflejo en algunos indicadores sociales, tales como la disminución de la mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de vida, aunque siguen estando por debajo de la media de la UE. No obstante, hay otros signos que siguen dando fe de las precarias condiciones de la estructura social como son la expansión de afectados por el SIDA, la gran cantidad de niños pobres y de huérfanos acogidos en instituciones, la falta de material en las escuelas y en los hospitales, el deterioro de los edificios públicos y el aumento de la incidencia de enfermedades infecciosas que parecían erradicadas (como la tuberculosis y la sífilis), que pueden asociarse con la malnutrición, la falta de higiene y la pobre calidad de vida.

Los datos sobre los grupos con mayor riesgo de verse afectados por situaciones de pobreza (Cuadro 7) consideran como indicador umbral el 50%



de la mediana del consumo familiar y se comparan las estimaciones de los PECO y los países de la antigua Unión Soviética a finales de los años noventa, con el riesgo que se observaba diez años antes en la UE pero, en este caso, la línea de corte se ha marcado en el 50% de la media del consumo familiar.

En las tres zonas se observa que la pobreza se relaciona con el ciclo de vida y afecta en mayor medida a las edades más vulnerables como la infancia y la vejez, cuyos coeficientes superan el valor 1. Pero mientras que los niños tienen un indicador de riesgo mayor en los PECO que en Europa occidental y en la antigua URSS, el riesgo de los ancianos se sitúa en el Este más próximo a la propensión media de cualquier persona y, sin embargo, estaba en la UE un 25% por encima de ella. Lo cual puede estar relacionado con la mayor esperanza de vida de la zona occidental y el posible desfase que todavía tienen sus sistemas de protección social para hacer frente a las necesidades generadas por el volumen creciente de personas con edades muy avanzadas.

Desagregando según la vinculación laboral, las mayores posibilidades de verse afectado por la pobreza las tienen los parados, aunque resulta llamativo el bajo coeficiente de los países de la antigua URSS. Aún es más sorprendente si tenemos en cuenta los escasos niveles de cobertura de las prestaciones por desempleo que tienen esas economías. Lo cual induce a pensar que o bien tienen otras fuentes de ingresos al margen de la actividad laboral, como las provenientes del sector informal, o bien las redes familiares extensas se ayudan entre sí y compensan las carencias de unos con las rentas de otros miembros.

**CUADRO 8. RIESGO DE POBREZA CON RELACIÓN A LA MEDIA<sup>7</sup>**

	UE	PECO	CIS
<i>Edad de los individuos</i>			
0 a 15	1,27	1,37	1,09
16 a 64	0,87	0,85	0,92
más de 65	1,26	1	1,09
<i>Situación laboral del cabeza de familia</i>			
Empleado	0,69	0,79	0,84
Desempleado	2,38	3,31	1,32
Jubilado	1,29	0,91	1,2
<i>Nº perceptores de ingresos laborales en la familia</i>			
0	1,51	2,07	1,43
1	0,91	1,31	1,1
2 ó más	0,59	0,55	0,84

Fuente: Klugman, J., Micklewright, J. y Redmond, G., 2002.

En los hogares con un perceptor de rentas laborales, es significativo el alto riesgo mostrado por los indicadores tanto de los PECO como de la CIS, lo que pone de manifiesto el bajo nivel de la remuneración o su insuficiencia para atender a las necesidades de todos los miembros de la familia. Como se obser-

<sup>7</sup> Coeficiente mayor que 1 indica una propensión por encima de la media a verse afectado por la pobreza, mientras que los valores por debajo de 1 señalan que hay un riesgo menor que la media.

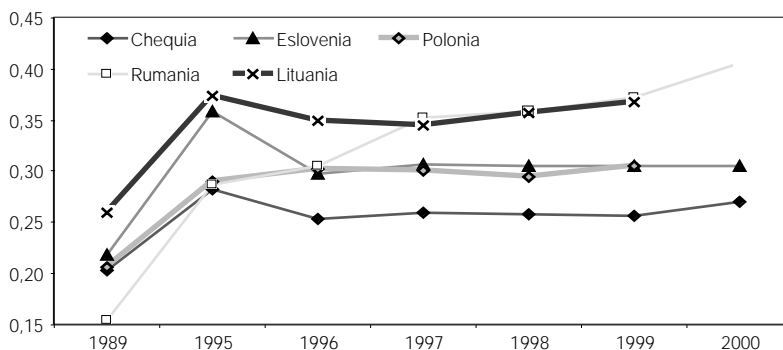
va en el cuadro, los grupos de alto riesgo forman parte de la población activa, con frecuencia es debido a su condición de parados pero también se ven envueltas muchas personas que tienen un empleo.

Distintos estudios sobre el tema insisten en la misma dirección, que la pobreza se ha extendido por todos los países del Este y que afecta en una buena proporción a personas en edad de trabajar. Es, por tanto, un problema directamente relacionado con la destrucción de empleo y con los bajos salarios. Esa precariedad puede mejorarse con una dinámica de crecimiento que sienta las bases para generar nuevos puestos de trabajo y un reparto menos disperso de las remuneraciones de asalariados, pero hasta ahora no se ha producido esa difusión del crecimiento hacia la población más necesitada e inevitablemente tendrá que estar apoyada y dirigida por la intervención pública.

### 3.3. DESIGUALDAD DE RENTA Y ACTIVIDAD LABORAL

Junto con los datos sobre distribución de la renta arriba mencionados, se dispone también de algunos datos específicos sobre la distribución de los ingresos percibidos por la actividad laboral (gráficos 1 y 2). Estos datos sólo se refieren a cinco países de la región, pero no obstante resultan ilustrativos y de interés porque permiten establecer contrastes entre comportamientos distintos de los países considerados: Chequia, Eslovenia, Polonia, Rumania y Lituania.

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS LABORALES: COEFICIENTE DE GINI



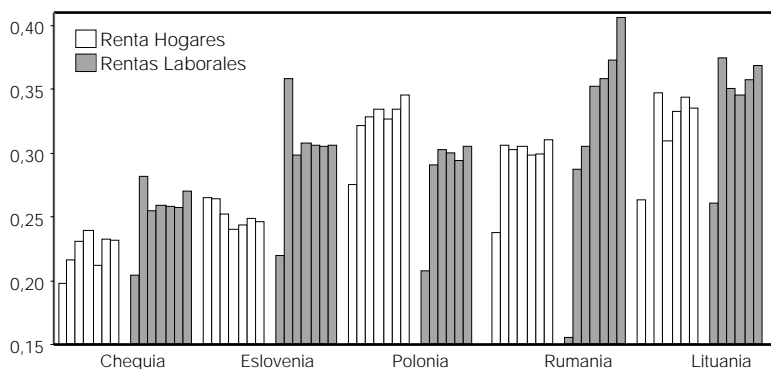
Fuente: UNICEF 2002

Atendiendo, en primer lugar, a los niveles de desigualdad que presentan estos cinco países, con los datos ya expuestos sobre el coeficiente Gini referido a la renta de los hogares cabe establecer una clasificación con tres agrupaciones. Lituania y Polonia son los que presentan mayor desigualdad, es decir, coeficientes más altos; Rumania tiene una situación intermedia; y Eslovenia y Chequia son los que mantienen un menor grado de desigualdad.



Excepto en Eslovenia, en los otros cuatro casos se constata que la desigualdad aumentó de forma considerable durante la primera fase de la transición, de modo que la profunda recesión que castigó a todas las economías dio lugar a un auténtico “salto” en el grado de desigualdad, aunque de magnitud diferente en cada uno de ellos según se observa en el gráfico 2 comparando los datos de 1989 y 1995<sup>8</sup>.

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA PER CÁPITA DE LOS HOGARES Y DE LAS RENTAS LABORALES: COEFICIENTE GINI (AÑOS 1989 Y DE 1995 A 2000).



Fuente: UNICEF, 2002

Tras ese salto, dentro del primer grupo de países, Polonia ha seguido elevando su coeficiente, mientras que en Lituania ha tendido a reducirse; Rumania muestra una trayectoria zigzagueante de su coeficiente; y entre los de menor desigualdad, Chequia también presenta una evolución fluctuante del coeficiente, al alza o a la baja según los años, y Eslovenia mantiene relativamente estable su coeficiente, apreciándose incluso una ligera tendencia descendente.

En cambio, si se considera el coeficiente Gini para la distribución de las rentas de la actividad laboral, tanto la clasificación por países como la evolución de sus respectivos coeficientes son significativamente diferentes. Ahora, los países con mayor desigualdad en las rentas laborales son Rumania y Lituania, con coeficientes que se acercan o superan el 0,4; el primero de ellos partía de un escaso grado de desigualdad y lo fue incrementando a lo largo de los años, mientras que en Lituania se produjo un fuerte alza inicial del coeficiente y después ha descendido con suavidad. En una posición intermedia se sitúan Eslovenia y Polonia, con coeficientes en torno a 0,35, provocados por

<sup>8</sup> Los datos disponibles para los otros países de la región asociarían a Estonia y Letonia con el grupo de mayor desigualdad en la renta de los hogares; a Bulgaria con el grupo intermedio; y a Eslovaquia y Hungría con el grupo de menor desigualdad.

el salto inicial, pero mostrando trayectorias posteriores distintas, ya que Polonia ha seguido elevando su coeficiente mientras Eslovenia lo ha moderado. Por último, Chequia muestra la menor desigualdad entre las rentas laborales merced a que su primera elevación fue menor que en los otros países y después ha ido reduciendo el valor de su coeficiente.

Así pues, de lo expuesto se deducen dos tipos de similitudes. Una es que en todos los países, excepto en Eslovenia para la distribución de rentas entre los hogares, se produjo un fuerte aumento de la desigualdad durante la primera fase de la reforma, es decir, cuando la producción experimentó una fuerte contracción en todos ellos. La segunda similitud consiste en que en todos los países, excepto en Polonia, el grado de desigualdad en la distribución de las rentas laborales es mayor que en la distribución de las rentas totales de los hogares. Ese diferencial no es exagerado en Chequia y en Lituania, pero sí lo es bastante en Eslovenia y Rumania.

Esta segunda similitud es destacada por distintos estudios sobre el tema, sintetizados en el informe del Banco Mundial de 2000, los cuales señalan que el factor clave para explicar el aumento de la desigualdad en esta región hay que buscarlo en las rentas de trabajo, principalmente debido a la dispersión que han sufrido los salarios, pero también al crecimiento de las rentas no salariales, como las derivadas del autoempleo y las de actividades empresariales.

Tratando de buscar explicaciones a este proceso, cabe establecer un primer tipo de vínculo entre esas rentas laborales y la evolución general de la economía y del mercado de trabajo. Desde esta perspectiva, se constata que los países con mayor desigualdad en las rentas laborales, Rumania y Lituania, son también los que experimentaron las contracciones productivas más profundas y los que en los últimos años mantienen unos niveles de producción sensiblemente inferiores a los iniciales, es decir, cuya recuperación está siendo más lenta. Igualmente, son los que han perdido más empleo durante los años noventa y en los que el retroceso del salario real de los trabajadores empleados ha sido más intenso, sobre todo en Lituania. En cambio, no figuran entre los que presentan mayores tasas de desempleo, por lo que parece que no es ésta una variable relevante a la hora de explicar la distribución de las rentas laborales. Un factor adicional que concierne a Lituania en esta explicación es el hecho de que en el momento inicial, 1989, su grado de desigualdad ya era ostensiblemente superior al de los otros países.

En el escalón intermedio, Eslovenia y Polonia presentan perfiles con ciertas asimetrías para explicar su posición en el reparto de las rentas laborales. Comparando la evolución de ambos países, Polonia ofrece un mayor ritmo de crecimiento del PIB y de la producción industrial, registrando los mejores resultados productivos de toda la región; a la vez, muestra una pérdida de empleo algo mayor que Eslovenia y una tasa de desempleo también más alta, pero la recuperación de los salarios también ha sido más rápida en Polonia. Probablemente, esto significa que la mayor recuperación de la producción y

de los salarios en el caso polaco ha ido acompañada de una creciente diversidad entre los tipos y categorías de empleo y, con ello, también de los salarios; en tanto que en Eslovenia la contracción inicial se ha ido superando más paulatinamente, con menor ritmo de aumento de la producción, pero también con menores tensiones en el mercado de trabajo (menor pérdida de empleo, menor desempleo) manteniendo una mayor homogeneidad laboral que promueve una recuperación más lenta de los salarios, pero también una menor desigualdad entre ellos, de modo que el grado de desigualdad no ha seguido creciendo en los últimos años.

Estas características eslovenas son también las que presenta la economía checa: ritmo pausado de recuperación de la producción, el empleo y los salarios, además de menor desempleo que el resto. El hecho de que ostente una posición más favorable en términos de desigualdad de rentas laborales se deriva directamente del tono menos traumático, más gradual, con el que sus dirigentes emprendieron el proceso de reforma, de modo que las tendencias negativas de la fase contractiva fueron menos duras y, con ello el proceso de desigualdad laboral tuvo un menor calado que en los otros países, incluyendo a Eslovenia, como muestran los datos del gráfico 1 y 2.

No obstante, respecto de las comparaciones anteriores, debe tenerse en cuenta que la evolución de las rentas laborales no radica en exclusiva sobre la evolución del empleo y de los salarios. Desde este ángulo exclusivo, la recuperación de la producción durante los últimos años no ha ido acompañada de una mejora paralela del empleo, pero sí de una creciente dispersión salarial potenciada por las actividades que han logrado mayor recuperación productiva y mayores beneficios, como son las empresas industriales receptoras de inversión extranjera y/o con capacidad exportadora, y ciertas empresas comerciales y financieros. Esa tendencia es común a todos los países, si bien en dimensiones muy distintas como antes se ha razonado para los casos de Polonia y Eslovenia. En el mismo sentido discriminante han actuado las diferencias en el nivel educativo de los trabajadores, que bajo el antiguo sistema apenas influían, en tanto que actualmente, según un estudio del Banco Mundial (World Bank, 2000; p.149) la distancia educativa entre quienes poseen educación superior y quienes sólo tienen estudios primarios permite explicar el 11-15% de la desigualdad de renta observada en Polonia y Hungría, el 7-9% en Estonia y Letonia y llega al 20% en Eslovenia.

Pero, al mismo tiempo, muchos trabajadores asalariados también participan en otras actividades paralelas que les reportan ingresos complementarios, amén de que con la extensión de las relaciones de mercado han surgido nuevas vías para la obtención de ingresos a partir de los proyectos puestos en marcha por la iniciativa privada. En algunos casos, se trata de estrategias implementadas por colectivos afectados por el desempleo o por antiguos trabajadores subempleados. La expansión del autoempleo se materializa en la apertura de pequeños negocios en la industria y, sobre todo, en los servicios, a través de los cua-



les se intentan aprovechar las oportunidades que brinda la economía de mercado y, en ocasiones, completar con ello un sueldo escaso, o bien la ausencia del mismo debida al desempleo, los retrasos en los pagos o las vacaciones forzosas. No obstante, esos fenómenos no reflejan situaciones sociales tan límites como las que muestran los países de la Comunidad de Estados Independientes (CIS) que parecen responder a estrategias más desesperadas impulsadas por la mera supervivencia, ya que en buena medida se localizan en el sector agrario y tienen como objetivo principal la obtención de alimentos para el autoconsumo.

Finalmente, para explicar las causas de que - excepto en Polonia- la desigualdad entre las rentas laborales sea mayor que la reflejada en el conjunto de las rentas de los hogares, debe destacarse en lugar preferente la actuación correctora o redistributiva de los poderes públicos. Aunque el aumento del gasto presupuestario ha sido moderado y, dentro de él, las partidas destinadas a política social han sufrido una considerable merma, no obstante, las transferencias redistributivas que han continuado existiendo (prestaciones de la Seguridad Social, pensiones, becas, ayudas familiares...) han contribuido a paliar en alguna medida el grado de desigualdad generado por las actividades laborales, aunque la falta de disponibilidad de datos fiables nos impide determinar la cuantía y los efectos concretos de esa corrección.

Para terminar, no deben caer en el olvido dos factores adicionales que operan en sentido contrario, como elementos que alimentan la desigualdad, a veces con claras relaciones entre ambos: las rentas procedentes del "efecto riqueza" originado por la tenencia de propiedad y la amplia extensión de la corrupción que acusan estos países.

De un lado están los efectos promovidos por los procesos de privatización, en especial por los procedimientos usados para llevarlos a cabo, o más exactamente por los márgenes de privilegios y de opacidad con los que se han realizado con frecuencia tales operaciones. En los casos en los que se concedió prioridad a los denominados *insiders*, convirtiendo en accionistas a los directivos y empleados, las consecuencias negativas sobre la distribución de la renta han sido importantes, ya que esos traspasos de propiedad han defendido intereses muy particulares, dando cobertura a apropiaciones indebidas de activos y no han impulsado la necesaria reestructuración y modernización de las unidades productivas. Todo ello ha generado disparidades de renta muy notables entre los nuevos propietarios de los activos -que pueden negociar con ellos y obtener rentas de capital- y el resto de los trabajadores que al integrar la plantilla de empresas ancladas en un funcionamiento obsoleto tienen que conformarse con sueldos menguados.

Cuando se han utilizado otros mecanismos como la venta directa de las acciones a través del mercado, a veces con participación de inversores extranjeros, se ha obtenido una mayor transparencia en el traspaso de propiedad y, en términos generales, se han evitado los abusos más flagrantes originados por los excesos de concentración de la propiedad y la proliferación de opera-

ciones irregulares. No obstante, conviene señalar que la vinculación entre los procesos de privatización y la distribución de la renta se apoya en justificaciones cualitativas y en estimaciones indirectas, pues la evidencia estadística disponible es muy escasa.

De otro lado, numerosos estudios atribuyen una clara responsabilidad en la generación de desigualdad a la corrupción reinante en estos países. Este fenómeno incide negativamente de diversas maneras. Por una parte, frena el crecimiento económico y desincentiva la inversión productiva, de modo que reduce las oportunidades de creación de empleo y de mejora de los salarios. De otra parte, acentúa la debilidad de la recaudación del sector público y, por ello, limita la expansión del gasto social y de sus efectos redistributivos entre los sectores sociales más desfavorecidos.

#### 4. CONCLUSIONES

Bajo el antiguo sistema de planificación central las diferencias de renta no eran demasiado amplias. De hecho, las élites privilegiadas accedían a bienes y servicios mayores y mejores que el resto de la población merced a sus cargos políticos y administrativos, no tanto por la obtención de ingresos muy superiores que les proporcionarían mayor capacidad de compra. Por eso el coeficiente Gini era reducido, reflejando un relativo "igualitarismo a la baja", en un contexto de escaso bienestar social.

La desigualdad experimentó un salto muy significativo durante el primer periodo de la reforma, cuando se produjo una profunda contracción de la producción y una caída similar de los salarios y de la renta media. En ese marco se fue ensanchando una brecha en el bienestar de los diferentes grupos sociales debido a que la recesión no afectaba a todos por igual. El impacto negativo alcanzó a una gran mayoría de la población, siendo especialmente dañino para los desempleados; para los trabajadores en nómina de las empresas que no podían pagar salarios, y los que percibían remuneraciones muy bajas o con mucho retraso; junto con todos aquellos que recibían percepciones vinculadas a transferencias públicas. Por el otro lado, hubo una minoría que se benefició profusamente de las oportunidades legales, pero también de las irregulares: de la privatización, de la participación en nuevos negocios (muchos de ellos dentro del sector informal) y de otras facilidades derivadas de posiciones de acceso a información privilegiada que fueron extendiendo prácticas diversas de corrupción.

Posteriormente, en la fase de recuperación que tuvo lugar desde la mitad de la década de los noventa, se pueden detectar comportamientos diferentes en la distribución de la renta según los países. En los países de Visegrado -excepto Polonia- y en los dos balcánicos, la desigualdad se ha estabilizado, con ligeros aumentos o caídas, registrando en cualquier caso un nivel mucho más bajo los cuatro países de Visegrado que Rumania y Bulgaria. Por otra parte, la polarización social ha seguido ampliándose en

Polonia y los tres bálticos, que alcanzan los niveles más altos de la región en todos los indicadores relativos a la distribución de la renta. Esa persistencia o aumento de la desigualdad ha favorecido la aparición progresiva de bolsas de pobreza, aunque con distinta intensidad en cada uno de los países.

La información manejada permite señalar que la desigualdad en la renta de los hogares se basa en la desigualdad de las rentas procedentes de la actividad laboral, excepto en Polonia donde se aprecia la relación contraria, pues la distribución de las rentas laborales es menos asimétrica que la de las rentas domésticas. Una parte de esas diferencias laborales se deben a rentas no salariales, como las obtenidas con prácticas de autoempleo que han dado lugar a negocios rentables, pero cuya dimensión no podemos precisar porque no disponemos de evidencia empírica sobre ello.

La otra parte significativa de la desigualdad de las rentas laborales se debe a las disparidades salariales que se han ido generando por motivos distintos a lo largo del proceso de transición económica. Aunque sólo hemos podido conseguir datos para cinco países, se pueden apuntar algunas explicaciones al respecto.

Los países con mayor desigualdad, Rumania y Lituania, son también los que han conseguido una menor recuperación de la contracción sufrida en la producción, en el empleo y en el salario real. Por lo tanto, en estos países el nivel de atraso de su proceso de reformas permite explicar las diferencias en las remuneraciones que perciben los trabajadores y que son el germen clave de la desigualdad.

Sin embargo, la mayor o menor dinámica de crecimiento no es un referente absoluto para explicar la desigualdad en los otros países. En Polonia el coeficiente de distribución de renta ha seguido elevándose a pesar de haber obtenido los mejores resultados productivos de la zona, junto a una cierta mejora de los niveles salariales. Ahora bien, al mismo tiempo ha registrado pérdidas de empleo y tasas de desempleo significativas, lo cual sugiere que de esa recuperación producción-salarios no participan de manera uniforme los componentes de toda la estructura productiva, sino que ha conllevado una mayor diversidad retributiva entre las empresas y entre tipos de empleo, siendo esa diferenciación el resorte que sigue ahondando la dispersión salarial.

Eslovenia, por su parte, aunque tiene resultados productivos inferiores a los polacos, presenta una mayor homogeneidad en el comportamiento de sus empresas y menores tensiones en el mercado de trabajo; lo que ha permitido, incluso, reducir algo el coeficiente de desigualdad después del aumento experimentado en la fase recesiva de la transición.

Esta misma conclusión se refuerza en el caso de Chequia, que presenta una menor recuperación productiva pero refleja una situación menos desigual. La explicación no solo se debe a la relativa estabilidad de sus condiciones laborales, sino también a que su recesión inicial fue mucho menos traumática



que la de los países mencionados, con lo cual ha tenido que afrontar caídas más suaves de la producción, el empleo y los salarios, que han ejercido menos presión sobre el mercado laboral y, en ese sentido, han favorecido una distribución más equilibrada.

El menor nivel de desigualdad observado en la distribución de renta de los hogares respecto a las rentas laborales cabe atribuirlo a las transferencias públicas que, aunque menguadas, ejercen efectos redistributivos, si bien carecemos de datos estadísticos que permitan evaluar su alcance en cada país.

Por último, cabe señalar la existencia de otras fuentes adicionales de rentas, al margen del mercado de trabajo que alimentan la desigualdad, como son las procedentes del "efecto riqueza" originado por la tenencia de propiedad y por la amplia extensión de la corrupción que impregna el ejercicio de muchas actividades.

En suma, este trabajo trata de realizar un primer acercamiento a un tema relevante sobre el que la información es todavía insuficiente y los datos poco precisos. Quedan abiertas muchas cuestiones que deben profundizarse en análisis posteriores con un mayor soporte empírico y extendiéndose a más países, para poder emplear métodos más afinados y extraer formulaciones más concluyentes.

#### BIBLIOGRAFÍA

- Atkinson, A. B. (2000): "The changing distribution of income: evidence and explanation", *German Economic Review*, vol. 1, nº 1.
- Cámara, C., Virgili, M<sup>a</sup> T. y Bastida, B. (2000): "Consecuencias sociales de las políticas de transición", en : Flores, G. y Luengo, F. (Coords.): *Tras el muro: diez años después de 1989*, El Viejo Topo-FIM, Madrid; págs. 429-466.
- Economic Commission for Europe (2002): *Economic Survey of Europe, 2002*, nº 1.
- Ellman, M. (2000): "The social costs and consequences of the transformation process", *UN/ECE: Economic Survey of Europe, 2000* nº 2/3; págs. 125-145.
- Flemming, J. y Micklewright, J. (2000): "Income distribution, Economic Systems and Transition", en Atkinson, A.B. y Bourguignon, F.: *Handbook of Income Inequality*, Elsevier, Amsterdam; págs. 843-918.
- Flores, G. y Luengo, F. (2001): "La pobreza masiva en los países poscomunistas, ¿fenómeno pasajero o componente duradero de los nuevos sistemas económicos procapitalistas?", *Mimeo*, Universidad Complutense de Madrid.
- Galgóczy, B. (2002): "Social costs of the transformation in Central-Eastern Europe", *Papeles del Este*, nº 4; págs. 3-18.

- Gupta, S. et al (2001): "Transition Economies: How appropriate is the size and scope of Government?", *IMF Working Paper*, WP/01/55.
- Heller, P. y Keller, C. (2001): "Social Sector Reform in Transition Countries", *IMF Working Paper*, WP/01/35.
- Hölscher, J. (2001): "Income distribution and Convergence in the Transition Process. A Cross Country Comparison", *Luxembourg Income Study*, Working Paper nº 275.
- Klugman, J. Micklewright, J. y Redmond, G. (2002): "Poverty in the transition: social expenditure and the working-age poor", *Innocenti Working Paper*, nº 91.
- Milanovic, B. (1998): *Income, Inequality and Poverty during the Transition from Planned to Market Economy*, World Bank, Washington D.C.
- Milanovic, B. (1999): "Explaining the increase in inequality during the Transition", *World Bank Working Paper*.
- Nesporova, A. (2002): "Unemployment in the transition economies", *International Labour Office*, Geneva; 32 págs.
- Paci, P. (2002): *Gender in Transition*, World Bank, Washington D.C.
- Pascall, G. y Manning, N. (2002): "Social Europe East and West", en: Ingham, H. y Ingham, M. (Eds.): *EU Expansion to the East*, Edward Elgar, Cheltenham, UK; págs. 134-161.
- Rosenberg, D. (2001): "Eastern Enlargement of the European Union. Problems of Convergence: Growth, poverty and Social Policy in CEE Accession Candidates", *Massachusetts Institute for Social and Economic*, University of Massachusetts-Amherst; 21 págs.
- UNICEF (1999): *Women in Transition*, The Monee Project, Regional Monitoring Report nº 6, Innocenti Research Centre, Florencia.
- UNICEF (2001): *A decade of Transition*, The Monee Project, Regional Monitoring Report, nº 8, Innocenti Research Centre, Florencia.
- UNICEF (2002): *Social Monitor 2002*, The Monee Project, Innocenti Research Centre, Florencia.
- World Bank (2000): *Making Transition Work for Everyone: Poverty and Inequality in Europe and Central Asia*, Washington D.C.
- World Bank (2001): *Transition. The First Ten Years: Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union*, Washington D.C.